

RUMANÍA

ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

El Gobierno aprobó a primeros del mes de septiembre, mediante ordenanza de urgencia, el proyecto de rectificación presupuestaria sin obtener la aprobación del Consejo Supremo de Defensa del País, en el contexto de las disensiones que existen al respecto entre el Ejecutivo y el jefe del Estado. El día antes de la presentación, el presidente había suspendido la reunión del Consejo Supremo de Defensa del País al no haber llegado los miembros del Consejo a un acuerdo para la aprobación del proyecto.

Klaus Iohannis ha solicitado al Gobierno que presente un nuevo proyecto que elimine los recortes calificados de "inexplicables" de los presupuestos para las instituciones del sector de la seguridad nacional. El presidente ha acusado al Ejecutivo de tener una agenda paralela a la de los ciudadanos y de tratar de desviar la atención de la opinión pública de los problemas graves para los cuales no halla solución.

Iohannis ha solicitado públicamente al Defensor del Pueblo que recurra al Tribunal Constitucional para verificar en qué medida la ordenanza de urgencia de rectificación del presupuesto estatal para el año 2018 cumple las exigencias constitucionales. Por otra parte, el presidente ha afirmado que la Primera Ministra ha ignorado la invitación a dialogar sobre el tema de la rectificación presupuestaria, lo que en opinión del presidente representa un precedente peligroso en las relaciones institucionales. El diálogo entre el presidente y la primera ministra fue sustituido por una reunión entre los ministros de Finanzas y de Justicia, Eugen Teodorovici y Tudorel Toader, respectivamente, y dos consejeros presidenciales.

El motivo de la ausencia de la Primera Ministra era que en esos días estaba de visita oficial a España. Durante la misma, Viorica Dancila y el rey Felipe VI han evocado la relación privilegiada existente entre los dos países, el excelente nivel de las relaciones bilaterales a nivel político y de varios sectores de actividad, especialmente económico.

La primera ministra rumana y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, firmaron dos acuerdos en los sectores de la defensa y de la administración pública. Los dos altos responsables han aludido a la excelente cooperación en el sector económico que ha venido registrando una evolución positiva tanto en el plano de los intercambios que se cifran en 4000 millones de euros, como con respecto a la cifra de inversiones españolas en Rumanía. Viorica Dancila ha agradecido la actitud constructiva de las autoridades y de la sociedad española frente a la comunidad rumana que vive en España que a comienzos del año rondaba la cifra de 870.000

miembros, siendo la comunidad extranjera más grande en el país. Viorica Dancila ha enfocado también el problema de la concesión de la doble nacionalidad para los rumanos residentes en España. La visita no ha incluido encuentro alguno con los representantes de la comunidad de rumanos. Parte de ellos se han manifestado con pancartas contra el gobierno, descontentos con la situación creada durante el mitin de la diáspora del pasado 10 de agosto en Bucarest, cuando los gendarmes hicieron uso de la fuerza.

Este incidente sigue produciendo consecuencias. Los diputados han rechazado a mediados de septiembre la moción presentada por el Partido Nacional Liberal (PNL) contra la ministra del Interior, Carmen Dan. Los liberales exigieron su renuncia por la forma en que había coordinado la intervención de los gendarmes, que consideran excesiva, y por perjudicar la imagen de Rumanía en el exterior. Carmen Dan explicó que la manifestación del 10 de agosto fue tratada como una demostración que planteaba riesgos para el orden público, y que la intervención fue legal. Sin embargo, los comentarios de la ministra del Interior no han convencido a los representantes de la oposición. Por otro lado, el Partido Social Demócrata (PSD) principal partido de la coalición gobernante, ha pedido a las instituciones del Estado que investiguen con urgencia las informaciones relativas a una posible financiación del exterior de las protestas callejeras de aquel día y las acciones premeditadas tendentes a provocar violencias.

Tras la aprobación, por parte del Senado, de un proyecto de ley que redefine la familia, se ha convocado, para el 7 de octubre un referéndum sobre este asunto. Según este texto, la revisión de la Constitución prevé que la familia se basa en el matrimonio entre un hombre y una mujer, y no entre cónyuges, como es actualmente. La decisión de organizar el referéndum se basa en una iniciativa ciudadana que ha conseguido juntar tres millones de firmas en todo el país. Firmada incluso por los representantes de los cultos de Rumanía, la iniciativa es similar a aquellas formuladas años pasados en Croacia y Eslovenia. La asociación ACCEPT, que defiende los derechos de las minorías sexuales, ha reaccionado diciendo que el voto del Senado representa una violación del derecho a la vida privada y a una familia, un derecho inalienable de todas las personas, indiferentemente de su género y orientación sexual.

La primera ministra Viorica Dăncilă ha pedido a todas las instituciones involucradas en la organización del referéndum que asuman toda la responsabilidad y que inicien los trámites necesarios. Varios jefes de la Iglesia ortodoxa, mayoritaria en Rumanía, han animado a los creyentes que digan "sí" en el referéndum.

El líder del PSD (de izquierda, el principal partido en el Gobierno de Rumanía), Liviu Dragnea, ha sido confirmado en el cargo, después de haber ganado el voto de confianza en la reunión de la dirección del

partido. Dragnea ha anunciado que en octubre tendrá lugar una nueva reunión de la dirección del PSD, cuando sería posible decidir hacer un reajuste. La reunión se ha organizado después de que algunos importantes miembros del partido firmaran una carta abierta en la que pidieron la dimisión de Dragnea incluso del cargo de presidente de la Cámara de los Diputados. Los firmantes han afirmado entre otros temas que la situación jurídica del mismo alto cargo se ha convertido en la gran vulnerabilidad del partido, sobre todo en el contexto en que en 2019 tendrán lugar elecciones europeas y presidenciales, así como locales y legislativas en 2020. Los firmantes de la carta han pedido también que la primera ministra Viorica Dăncilă, presidenta ejecutiva del PSD, asegure la dirección interina del partido hasta que se organice un congreso extraordinario.

A finales de mes, el Gobierno ha adoptado una ordenanza de urgencia con respecto a la modificación de la ley referente al procedimiento de insolvencia. Las nuevas previsiones persiguen detener algunas prácticas abusivas, como las insolvencias repetidas y asegurar oportunidades iguales de desarrollo de los negocios. Más de 6000 compañías con más de 64.000 empleados están en el presente en insolvencia en Rumanía, situación que reclamaba la adopción de unas medidas urgentes, ha declarado el titular de Finanzas, Eugen Teodorovici, que ha precisado que las modificaciones operadas en el presente han sido determinadas por una serie de disfuncionalidades aparecidas a raíz de la aplicación de las formas anteriores a la ley de insolvencia. La ordenanza de urgencia prevé la conversión de las deudas de las compañías en acciones. Estas llegarán a propiedad del Estado a cambio de los atrasos que las respectivas empresas tienen que pagar al Presupuesto y el servicio fiscal aplicará un procedimiento claro al respecto, ha añadido el titular de Finanzas. El ámbito de negocios ha criticado las modificaciones acusando una nacionalización enmascarada. Por otra parte, en la misma reunión del Gobierno, se ha decidido que la enseñanza del idioma rumano en las clases de primaria de las minorías nacionales se haga por los cuadros didácticos de los respectivos grados. Anteriormente a la toma de esta decisión, que no fue de su agrado, el ministro de la Educación nacional, Valentin Popa, presentó su renuncia. La modificación de la ordenanza se ha hecho a solicitud de la Unión Demócrata de Húngaros en Rumanía con la que la coalición formada por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas en el poder tiene firmado un protocolo de colaboración. En una declaración, Popa ha explicado su posición y ha apreciado que el idioma rumano y Rumanía no son negociables y que todos los niños del país deben hablar el rumano para tener la oportunidad de vivir y trabajar en Rumanía.

#

#